

DEBATE SOBRE LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL SECTOR SALUD



Por el Lic. Ariel Goldman (*)

La intervención estatal en el sector salud ha sido un tema de debate durante décadas, generando tanto defensores como detractores. Es innegable su papel rector, regulador e incluso financiador y prestador en todo sistema de salud.

Sin embargo, la reciente coyuntura global ha reavivado esta discusión, subrayando la importancia de un sistema de salud robusto y accesible para todos los ciudadanos. A continuación, se presentan los argumentos a favor y en contra de esta intervención, analizando su impacto en la economía y la salud pública.

Uno de los principales argumentos a favor de la intervención estatal en el sector salud es la equidad en el acceso a servicios médicos. Los defensores sostienen que el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan acceso a cuidados de salud de calidad.

Esto es especialmente crucial en contextos, como el nuestro donde la desigualdad económica es significativa y muchas personas no pueden costear seguros de salud privados ni tienen acceso a obras sociales.

Además, la intervención estatal contribuye a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud pública. A través de programas de vacunación masiva, campañas de educación sanitaria y medidas de control de enfermedades, el Estado puede reducir significativamente la incidencia de enfermedades prevenibles. Esto no solo mejora la salud de la población, sino que también reduce los costos a largo plazo asociados con el tratamiento de enfermedades crónicas y emergentes.

Otro punto a favor es la eficiencia en la asignación de recursos. En sistemas de salud completamente privatizados, existe duplicación de servicios y recursos mal distribuidos, entendiéndose que la lógica de distribución sigue la rentabilidad y no esencialmente las necesidades de la población.

La intervención estatal puede ayudar a coordinar y optimizar el uso de recursos, asegurando que las áreas más necesitadas reciban la atención adecuada. Esto es especialmente relevante en situaciones de emergencia, como pandemias, donde una respuesta centralizada y organizada es esencial para mitigar los efectos de la crisis.

Por otro lado, los detractores de la intervención estatal argumentan que puede llevar a ineficiencias y burocracia. En muchos casos, los sistemas de salud públicos se caracterizan por largas esperas, servicios sobredemandados y una gestión muchas veces ineficiente.

La burocracia y la falta de incentivos para mejorar el rendimiento pueden resultar en una calidad de atención subóptima. A pesar de los grandes avances en materia de eficiencia en el sector público, hay una gran disparidad entre provincias e incluso entre efectores.

Otro argumento en contra es la carga fiscal que implica mantener un sistema de salud estatal. Financiado a través de impuestos, un sistema de salud pública puede requerir un gasto significativo del presupuesto estatal. Esto puede implicar mayores impuestos para los ciudadanos y las empresas, lo que algunos consideran una carga injusta y contraproducente para la economía.

Además, algunos críticos sostienen que la competencia en el sector privado es esencial para la innovación y la mejora continua de los servicios de salud. La intervención estatal puede desalentar la competencia y, por ende, reducir la calidad y variedad de servicios disponibles. El sector privado, motivado por el lucro, tiene incentivos para innovar y ofrecer mejores servicios a los pacientes.

El caso argentino

Como es ampliamente conocido, el sistema argentino es fragmentado y sumamente complejo. La realidad económica en la que se encuentra inmerso con cientos de instituciones prestadoras y financiadoras al borde la quiebra, con oligopolios dominantes y los precios distorsionados presenta constantes retos.

El año 2024 fue un período de transición y ajuste en el sector salud argentino. Las desregulaciones y nuevas regulaciones trajeron tanto oportunidades como desafíos. Mientras que la descentralización y la competencia libre prometieron mejorar la eficiencia y el acceso a la salud, las fluctuaciones económicas y los problemas de financiamiento presentaron obstáculos significativos.

Sin embargo, más allá de mejoras en aspectos macroeconómicos esenciales, las políticas implementadas para disminuir la intervención estatal han sufrido reveses que debieron enfrentarse. Como ejemplos, debemos considerar la idea de desregular el precio de los prepagos chocó con la realidad de un sistema particular y obligó al Estado a intervenir generando litigios judiciales e inestabilidad en el sector privado.

A la vez, la idea de cerrar el Hospital Laura Bonaparte tuvo repercusiones negativas de la comunidad y forzó a recalcular nuevamente. Actualmente, la descentralización hacia las provincias parece ser la estrategia elegida.

En definitiva, el equilibrio entre las políticas de desregulación y su implementación efectiva será crucial para el futuro del sistema de salud en la Argentina. La coordinación entre los tres subsectores, el estatal, la seguridad social y el sector privado, será la clave para construir un sistema más eficiente, competitivo, innovador y con mayor accesibilidad.

Conclusión

En resumen, el debate sobre la intervención estatal en el sector salud es complejo y multifacético. Por un lado, la intervención puede promover la equidad, la prevención de enfermedades y la eficiencia en la asignación de recursos. Por otro lado, puede enfrentar desafíos significativos como la ineficiencia burocrática, la carga fiscal y la posible inhibición de la competencia y la innovación.

En última instancia, encontrar un equilibrio entre la intervención estatal y la iniciativa privada podría ser la clave para desarrollar un sistema de salud que sea tanto equitativo como eficiente, adaptándose a las necesidades particulares del país y su contexto económico.

En definitiva, todo se sintetiza a una discusión de economía básica ¿Qué rol debe tener el Estado? ■

(*) Profesor universitario.